



El arequipeño Juan Manuel Guillén es una garantía de gestión democrática en una región hecha para la política (Foto: letracierta.pe).

Se quieren bajar la descentralización

I

En abril del año 2000, en una entrevista concedida a Augusto Álvarez Rodrich en la revista Debate, Pablo Macera anunciaba que “la violencia social puede ser mucho mayor de lo que algunos creen precisamente porque ya no existe violencia política”. Después de catorce años resulta válido preguntar si existe un vínculo entre los senderistas y los sicarios o entre los cuadros, los militares y las pandillas urbanas. ¿Cómo podríamos definir, además, la violencia social? ¿Cómo la diferenciamos de la violencia política? ¿Cómo la articulamos con aquella delincuencia de cuello blanco, la que practican los funcionarios públicos, los integrantes de los partidos políticos, del Congreso y de otras instancias gubernamentales?

Las cárceles se han dividido por clases sociales: Lurigancho, Sarita Colonia y Castro Castro son el destino del pueblo en el más amplio sentido del término; Piedras Gordas está señalada para la delincuencia sofisticada, subversiva y vinculada con el narcotráfico; y San Jorge es para los delincuentes de cuello blanco, aquellos que comenten delitos económicos, y es entendida como la sucursal del Club Nacional. Las tres están sobrepobladas. Pero ¿sería posible establecer lazos entre estos tipos de prisiones?

La mayoría de las regiones donde ha explotado la violencia tiene un

denominador común: hay dinero, hay relaciones entre los diversos actores, hay nexos entre el gobierno regional y local y, sobre todo, hay funcionarios que hacen negocio con los empresarios. Esto sucede en las regiones aparato formal de la economía y del Estado. El botón de muestra es la minería informal, que no podría actuar sin el aval del Estado o prescindiendo del mercado interno y externo.

II

En los últimos meses, los medios de comunicación han explotado al máximo las manifestaciones de violencia en el entorno de los gobiernos regionales. Es como si anticiparan que las elecciones de octubre de este año significarán mucho para las inversiones que se proyectan. La relación entre las grandes empresas y los gobiernos regionales resultan fundamentales. ¿Hasta qué punto el caso Conga, en Cajamarca, durante la gestión de Gregorio Santos, es un ejemplo a tomar en consideración, un referente, un aviso, una alarma para las futuras inversiones? ¿La desaceleración de nuestra economía se ve agravada con esta clase de gobiernos regionales? ¿El propio proceso de descentralización estaría cuestionado al funcionar políticamente con intereses contrarios a la inversión económica? ¿Es, en alguna medida, un freno a la inversión? ¿Las grandes transnacionales pretenden deslegitimar a los dirigentes regionales con el propósito de



Sergio Tejada es una piedra en el zapato de García, quien lo contrataca sin escrúpulos (Foto: Andina).

que sean sus empresas las que ordenen el territorio y no tengan que pasar por negociaciones políticas que van en contra de sus intereses?

El proceso de descentralización ha vivido sus días más difíciles últimamente, pues la gran prensa se ha dedicado a acusar a la mayoría de sus presidentes regionales y enviado a prisión a dos de ellos. La puntería está puesta y, con o sin

canon, cada uno de los gobiernos regionales deberá rendir cuentas.

III

Sin embargo, entre nosotros no es costumbre seguir los casos de corrupción y después de algún tiempo caen en el olvido. El gran trasfondo de este ruido mediático alrededor de los escándalos de corrupción en los gobiernos regionales



Andina

Salta alto y se defiende solo.

es la investigación de la Megacomisión presidida por el nacionalista Sergio Tejada. El dedo acusador recae sobre la figura de Alan García Pérez durante su segundo período. Como acompañante, encontramos el caso de otro expresidente, Alejandro Toledo, vinculado a compras inmobiliarias familiares no explicadas. Da la impresión de que las acusaciones son seguidas de negociaciones y, en algunos casos, de amenazas recíprocas: “Si me acusas de indultar a reconocidos narcotraficantes, yo te acuso de que tu campaña presidencial ha sido financiada por los mineros informales”. Una por otra. Apristas contra nacionalistas. Y que actúan bajo la lógica elemental de las alianzas: “El enemigo de mi enemigo, es

mi amigo”. Nadie estaría limpio, nadie puede arrojar la primera piedra. Ni los apristas ni los fujimoristas, por eso el interés de la prensa de meter en el mismo saco a los nacionalistas.

En el número pasado y en este abordamos el tema de la corrupción, de los negocios ilegales, y damos a entender que el trasfondo constituye una oscura malla que respalda y soporta a los diversos grupos entrelazados por la corrupción. Y, sin duda, una de las herencias más difíciles de eliminar de los diez años del fujimorismo es la sensación de impunidad generalizada, el cinismo con que se maneja la política, la tremenda impotencia ante los grandes casos y de castigar a los culpables. (ASL) ■